



Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

INVESTIGACIÓN N° 266-2009-APURÍMAC

Lima, veintiocho de diciembre de dos mil diez.-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el doctor Jovito Salazar Ore contra la resolución número once expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, obrante a fojas ciento nueve, que le impuso la medida disciplinaria de amonestación en su actuación como Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Apurímac; y, **CONSIDERANDO: Primero:** Que se atribuyó al Juez quejado haber presuntamente retardado la emisión de la resolución final recaída en la Queja número noventa guión dos mil siete, infringiendo el artículo doscientos uno, inciso uno, y el artículo ciento ochenta y cuatro, inciso uno, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; hecho respecto del cual el Órgano de Control ha comprobado la existencia de responsabilidad disciplinaria que ha sido sancionada con la medida disciplinaria de amonestación, conforme lo regulado en el artículo doscientos ocho de la citada ley orgánica, y actualmente regulado en el artículo cincuenta y uno, inciso uno, de la Ley de la Carrera Judicial. **Segundo:** Que el recurrente no encontrándose de acuerdo con el pronunciamiento de la Jefatura de la Oficina de Control de Magistratura del Poder Judicial interpuso recurso de apelación a fojas ciento cincuenta, alegando en base a los mismos fundamentos de su descargo, lo siguiente: **a)** Que la presenta queja ha sido interpuesta por el doctor Rony Armando Villanueva Cárdenas, Juez de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en represalia contra actos regulares del Presidente de la Corte Superior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo doscientos diez del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que propuso su abstención y la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial acogiendo la propuesta dispuso su abstención en el cargo; **b)** Que la demora en la emisión de la resolución en la Queja número noventa guión dos mil siete se originó porque él solo resolvía todos los procesos que se tramitaban en la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Apurímac; **c)** Que la persona que hizo la valoración del tercer considerado de la resolución recurrida no conoce como funciona la labor de un Presidente de Corte Superior, que a la vez ejerce la Jefatura de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura en adición a sus funciones, conforme expone en sus fundamentos de hecho, redactaba y firmaba las resoluciones, y el personal de dicha dependencia no proyectaba resoluciones finales por que es labor encomendada exclusivamente a su Jefe, que solo proyecta y redacta resoluciones de impulso procesal, contando únicamente con dos asistentes; y, **d)** Que nunca busco argucias para eludir su responsabilidad. **Tercero:** Que, en el presente caso cabe señalar que el artículo ciento cinco del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa número ciento veinte y nueve guión dos mil nueve guión CE guión PJ, señala entre los requisitos para la interposición de la apelación indicar el agravio,



Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

//Pág. 2, INVESTIGACIÓN N° 266-2009-APURÍMAC

entendiéndose éste como la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral que contiene la resolución impugnada; perjuicio que el juez impugnante no ha señalado, sino que se ha limitado solamente a transcribir los mismos fundamentos de sus informes de descargo que obran a fojas dieciocho y setenta y cuatro. **Cuarto:** Que, el Tribunal Constitucional ha establecido que la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, como toda potestad en el contexto de un Estado de Derecho (artículo tres de la Constitución Política del Estado) está condicionada en cuanto a su propia validez, al respeto de la misma Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Por ello, la Administración en la sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios está vinculada al irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman⁵. **Quinto:** Que, siendo así, la Oficina de Control de la Magistratura tiene como función evaluar la conducta funcional, idoneidad y desempeño funcional de los jueces y auxiliares de justicia del Distrital Judicial respectivo, en aras de alcanzar la prestación de un eficiente servicio de justicia; en ese sentido, la investigación disciplinaria y/o queja tiene por finalidad, por una parte, sancionar a los operadores judiciales cuya actuación vulnere los principios y valores de recta administración de justicia, con el objeto de corregir su actuación o expulsarlo de su seno en casos graves; y, por otro lado, incentivar el ejercicio honesto, probo, independiente y eficiente en la prestación del servicio de justicia⁶. **Sexto:** Que en este sentido, la queja está encaminada a que los usuarios de la justicia puedan formular sus respectivas denuncias respecto al comportamiento de los jueces y del personal en el desempeño de sus funciones. Así, a través de la queja se pone en conocimiento de ese órgano de control los actos de corrupción, la demora en la tramitación de los procesos, la pérdida de expedientes y/o escritos, entre otros. **Sétimo:** Que del caso analizado, se tiene que el juez quejado Jovito Salazar Ore, en su actuación como Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en la Queja número noventa guión dos mil siete emitió la resolución número diecinueve de fecha cinco de mayo de dos mil ocho que obra en copia simple a fojas cuarenta y tres, dando cuenta del Oficio número cero cuatrocientos ochenta y cinco guión dos mil ocho guión MBJ guión uno JFAM guión AND guión CSJAP diagonal PJ guión EZOP, procedente del Juez del Primer Juzgado de Familia de Andahuaylas, devolviendo la notificación diligenciada; siendo desde dicha fecha que no existió impulso procesal hasta el diecisiete de octubre de dos mil ocho, fecha en que el recurrente emitió la resolución número veinte, imponiendo la medida disciplinaria de apercibimiento al doctor Rony Armando Villanueva Cárdenas (ahora quejoso), por

⁵ CRESCI VASSALLO, Giancarlo E. "El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Administrativo Sancionador y la Jurisprudencia Constitucional", en Gaceta del Tribunal Constitucional, número 3, julio – setiembre 2006.

⁶ Artículo 75 del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 129-2009-CE-PJ.



Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

//Pág. 3, INVESTIGACIÓN N° 266-2009-APURÍMAC

su actuación como Juez Provisional del Primer Juzgado Penal del Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas, conforme aparece de la copia que obra de fojas cuarenta cuatro a cuarenta y siete, advirtiéndose que dicha queja estuvo paralizada por cinco meses y doce días, vulnerándose así el plazo establecido en el literal e) del artículo cincuenta y cuatro del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa número doscientos sesenta y tres guión noventa y tres guión SE guión TP guión CME guión PJ, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, que señalaba: *"El Jefe de la ODECMA emitirá pronunciamiento, en un plazo no mayor de cinco días, archivando, absolviendo, imponiendo en primera instancia las medidas disciplinarias de apercibimiento o multa, y/u opinando por la imposición de las sanciones de suspensión, separación o destitución, en este supuesto, si el investigado o todos los investigados a consideración del Jefe de la ODECMA resultan pasibles de una de las tres sanciones acotadas, elevará directamente el proceso ante el Jefe de la OCMA. Sin embargo, en los caos que imponga una medida disciplinaria contra uno de los investigados y decida proponer la imposición de otra mayor ante el Jefe de la OCMA, formará un Cuaderno con copia de todo lo actuado con el cual se seguirá el trámite de los medios impugnatorios que se pudieran interponer, elevando el original con la propuesta o propuestas"*; de este modo el juez quejado incurrió en retardo injustificado que no lo exime de responsabilidad funcional, resultando responsable de infracción al deber de resolver con celeridad, previsto en el inciso uno del artículo ciento ochenta y cuatro del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, encontrándose incurso en el supuesto de responsabilidad disciplinaria contemplada en el numeral uno del artículo doscientos uno de la citada Ley, vigente en la fecha de comisión del cargo imputado.

Octavo: Que ahora los motivos expuestos por el juez quejado tanto en su descargo como medio impugnatorio se apartan de toda lógica jurídica respecto a una causa justificante, esto en virtud del tiempo retrasado (cinco meses y doce días), del cuadro de producción de la Jefatura de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de la referida sede judicial del año dos mil ocho obrante a fojas ciento seis que indica trescientos treinta y nueve expedientes ingresados en dicho año (ciento veintiséis quejas, ciento diecinueve investigaciones y noventa y cuatro visitas ordinarias y extraordinarias), habiendo resuelto sólo ciento cuarenta y nueve expedientes (treinta y dos quejas, veinticuatro investigaciones y noventa y tres visitas ordinarias y extraordinarias), no justificando así el cargo imputado atendiendo el tiempo transcurrido que vulnera el plazo razonable y la producción es menor al cincuenta por ciento del ingreso anual; sumado a ello, se advierte que contaba con asistentes judiciales quienes apoyaban en las diferentes labores del juez quejado, aunado al principio de presunción de licitud, que causa presunción en los jueces y auxiliares de justicia en el desempeño de sus funciones, quienes actúan con arreglo a las normas legales y administrativas de su competencia en forma transparente, salvo prueba en contrario (prueba que existe en relación al cargo imputado y más no referente a los fundamentos expuestos por el recurrente para absolverlo del cargo

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

//Pág. 4, INVESTIGACIÓN N° 266-2009-APURÍMAC

imputado); por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el informe de fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y dos, por unanimidad; **RESUELVE: Confirmar** la resolución número once expedida por la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, obrante de fojas ciento nueve a ciento veintidós, que le impuso la medida disciplinaria de amonestación, en su actuación como Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Apurímac; y, los devolvieron. **Regístrese, comuníquese y cúmplase.-**
SS.



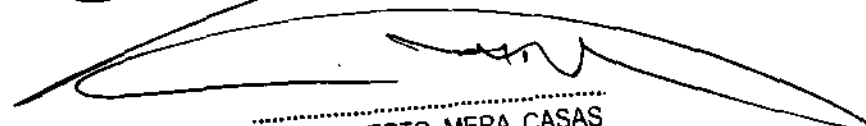

JAVIER VILLA STEIN


ROBINSON O. GONZALES CAMPOS

JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA


FLAMINIO VIGO SALDAÑA

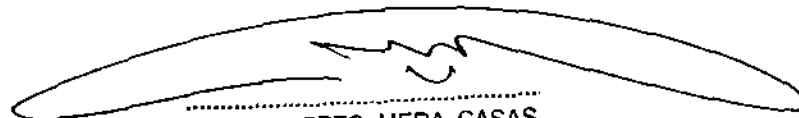

DARÍO PALACIOS DEXTRE


LUIS ALBERTO MERA CASAS
Secretario General

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL, que suscribe: **CERTIFICA:** Que el señor doctor **JORGE ALFREDO SOLÍS ESPINOZA** en su condición de integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, intervino en la deliberación y decisión de los presentes actuados, conforme al tenor de la resolución que antecede.-

Lima, 19 de octubre de 2011



LUIS ALBERTO MERA CASAS
Secretario General

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial



RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 263-2011-CE-PJ

Lima, 19 de octubre de 2011

VISTA:

La situación generada con motivo del sensible fallecimiento del señor Consejero, Juez Supremo titular doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza.

CONSIDERANDO:

Primero: Que si bien es cierto que hasta la fecha -sin tomar en cuenta el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial adoptado en esta sesión-, las resoluciones emitidas por este Órgano de Gobierno en pleno son firmadas por todos los señores Consejeros, es de tener presente dos principios de derecho rectores en la materia: a) La ineficacia de la resolución si falta alguna firma; y, b) Tal ineficacia no tendría lugar si surge un impedimento invencible después de haber participado en la discusión y votación. Un ejemplo evidente de plasmación positiva de estos principios es el artículo 125° del Código Procesal Penal.

Segundo: Que, al respecto, con fecha 15 de octubre del año en curso, se produjo el sensible fallecimiento del señor doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza, Juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República e Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desde el 14 de agosto de 2009, lo que ha originado que se encuentren aún pendientes de firma diversas resoluciones expedidas en asuntos gubernativos, administrativos y disciplinarios en cuya deliberación y decisión intervino el extinto Juez Supremo, conforme al acta correspondiente, y que ante el acontecimiento antes descrito hacen evidentemente imposible que puedan contar con su firma.

Tercero: Que, por consiguiente, es de aplicación supletoria, en vía interpretativa, los mencionados principios y, de este modo, superar el problema surgido habida cuenta de la fe pública judicial que arrojan las actas de las sesiones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Por estos fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, por unanimidad.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la ejecución de las resoluciones expedidas en los asuntos gubernativos, administrativos y disciplinarios en cuya vista,

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

//Pag. 2, Res. Adm. N° 263-2011-CE-PJ

deliberación y decisión intervino el señor doctor Jorge Alfredo Solís Espinoza como integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no han podido ser firmadas por el extinto Juez Supremo, previa certificación por parte del Secretario General de este Órgano de Gobierno, dando fe de su participación en la sesión respectiva.

Artículo Segundo.- La presente resolución constará en cada expediente que corresponda.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.



San Martín
CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

[Signature]
LUIS ALBERTO VÁSQUEZ SILVA

[Signature]
DARÍO PALACIOS DEXTRE

[Signature]
AYAR CHAPARRO GUERRA

LAMC